

Comunicado de prensa conjunto

El próximo martes, día 8, hemos convocado una huelga general en todas las administraciones públicas del Estado español. Es una huelga absolutamente necesaria, porque es el último instrumento que poseen los trabajadores para hacer valer sus derechos cuando todos los intentos para llegar a un acuerdo han fracasado. La profunda crisis que atraviesa este país ha sido ocultada por un gobierno irresponsable que se ha negado hasta ahora a adoptar una serie de medidas necesarias para afrontar los importantes desajustes estructurales de nuestra economía producto de un modelo económico basado en actividades de bajo valor añadido, intensivo en mano de obra de escasa cualificación, que se ha revelado como un gigante con pies de barro. La injusta distribución de la renta, los bajos salarios, los inmensos beneficios de unos pocos en detrimento de la mayoría y toda una serie de medidas encaminadas a mantener un sistema insostenible ha abocado a los sectores más desfavorecidos a una situación de endeudamiento que les condena a años de penuria mientras se debaten entre el paro y el infraempleo.

Mientras tanto, los grandes beneficios acumulados por la gran banca y los empresarios del ladrillo se encuentran a buen recaudo en los paraísos fiscales, después de que el Gobierno haya dilapidado dinero público en operaciones de rescate que lo único que han conseguido ha sido disparar el déficit del Estado sin conseguir relanzar el crédito y la actividad económica. Los verdaderos dueños del dinero, a través de los mercados y de los organismos internacionales de vigilancia de la economía, que carecen de control democrático alguno, son los que deciden quienes pagan las consecuencias de una crisis especulativa creada por ellos, con el fin de mantener sus privilegios, para lo que obligan a los gobiernos que están en sus manos a sacrificar la soberanía nacional para que la mayoría continúe pagando los créditos y las hipotecas que les esclavizan para toda la vida.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha sido llamado al orden por los mercados y en solo una noche ha encontrado una solución de emergencia que daba la vuelta a lo que hasta ahora había sido su criterio más firme: mantener los derechos sociales y las conquistas de los trabajadores. El presidente tomó la decisión de rebajarnos el sueldo a los empleados públicos, congelar las pensiones y recortar todas las medidas sociales adoptadas hasta ahora, sin que, por contrapartida se pusieran en marcha fórmulas tendentes a reformar el sistema productivo, desarrollar una política fiscal más justa y progresiva, mejorar la educación, promover la investigación y apoyar a la pequeña y mediana empresa, pasando de la noche a la mañana a ser el más feroz paladín de las políticas neoliberales y llevando a cabo un recorte social sin precedentes en la historia democrática de nuestro país.

En este marco, Zapatero ha aprovechado una insidiosa campaña en la que se acusa a "los funcionarios" de mantener supuestos privilegios así como de exceder en número de empleados a las necesidades del país, metiendo en el mismo saco a las distintas condiciones y categorías de empleados públicos. Según los autores de esta campaña, los privilegios de los funcionarios consisten en tratar de exigir el cumplimiento de las leyes laborales vigentes, tarea que se presenta cada vez más difícil, así como de disponer de un horario y un salario razonablemente adecuado a las necesidades de los trabajadores, sin que ello suponga poder ser despedidos de inmediato y de manera arbitraria, como ocurre en las empresas privadas. El objetivo de esta campaña es enfrentar a los empleados públicos con el resto de los trabajadores presentándonos como una casta insolidaria que se niega a colaborar con la recuperación económica, en lo que no es más que una agresión a los derechos de todos, simbolizándolos en los aquellos trabajadores que disponen de empleo fijo.

También se manipulan las cifras acerca del porcentaje de empleados públicos existentes en nuestro país mientras esconden que proporcionalmente somos una de las naciones de Europa con menor número de funcionarios, atribuyéndonos viejos tópicos sobre nuestra productividad y dedicación a los ciudadanos, y ocultando que en ocasiones la falta de personal sanitario, educadores o policías son objeto de denuncias ciudadanas que ponen en evidencia la necesidad de aumentar el número reempleados públicos.

Con estas medidas de agresión a los empleados públicos pretenden recuperar 15.000 millones de euros que ni resolverán la crisis ni enjugarán el déficit, porque se trata de actuaciones que nos llevan a una retracción del consumo y, por consiguiente, a la destrucción de empleo, que exigirá a su vez más gasto hasta que la espiral deflacionista lleve el país a la ruina.

La congelación de las pensiones a partir de 2011 es una medida desconocida en los últimos 30 años, va a afectar a más de 8 millones de pensionistas. El recorte vulnera los derechos adquiridos por los trabajadores. Incumple el acuerdo sobre pensiones del año 2006 y el propio pacto de Toledo.

Sin embargo, los sindicatos aquí reunidos creemos que hay una salida social a la crisis que consiste en la profundización del Estado del bienestar, que suponga la creación de empleo de calidad y duradero para colectivos de trabajadores cualificados con muy pocas posibilidades de mantenerse en el mercado de trabajo en condiciones dignas. Cada empleo creado en políticas sociales induce a su vez otros cuatro en sectores intensivos en personal al que se podría formar con rapidez. El parón a la Ley de la Dependencia expulsa a la mujer del mercado de trabajo ya que se la obliga a cuidar de sus mayores. Además la falta de guarderías y de ayudas a la natalidad provocan que España tenga una de las tasas de trabajo femenino más bajas de Europa. Por tanto, el gasto social permitiría a las mujeres incorporarse al mercado de trabajo en igualdad de condiciones, lo que ocasionaría la creación de gran número de empleo en tiempo reducido, fomentando así el consumo y la actividad económica, aspectos que ayudarían a superar la crisis.

Esta no es una huelga insolidaria y contra los ciudadanos. Los empleados públicos no nos negamos a realizar nuestra parte de sacrificio para remontar la crisis, pero exigimos que no seamos siempre los mismos los que nos esforcemos para superar la situación. Nada se resuelve con que unas personas pierdan sus derechos o vean disminuidos sus salarios mientras otros se benefician de la crisis. Los causantes de esta situación tienen nombres y apellidos y están a la vista de todos. No solamente niegan el derecho a la negociación colectiva a los empleados públicos, sino que el paso inmediato es un golpe brutal a los derechos del conjunto de los trabajadores a través de una reforma laboral impuesta por la patronal. Ahora somos los empleados públicos y los pensionistas los que padecemos las injustas medidas del Gobierno. Luego vendrán a por el resto de los trabajadores. Por eso la única respuesta adecuada es la huelga general.

Esta huelga del día 8 de junio es necesaria y justa, por lo que solicitamos la comprensión y el apoyo de toda la sociedad asturiana y, especialmente, de nuestros compañeros del sector privado. Llamamos a los empleados públicos a que tomen parte de forma activa en esta movilización, declarándose en huelga y cumpliendo estrictamente los servicios mínimos.